

CONGRESO NACIONAL

CAMARA DE SENADORES

SESIONES ORDINARIAS DE 1997

ORDEN DEL DIA N° 302

Impreso el día 9 de mayo de 1997

SUMARIO

COMISION DE ASUNTOS PENALES Y REGIMENES CARCELARIOS

Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica el Código Procesal Penal. (C.D.-90/96.)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios ha considerado el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-90/96), incorporando al título II del libro III del Código Procesal Penal el juicio abreviado; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja su sanción.

De conformidad con lo establecido por el artículo 120 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 9 de abril de 1997.

*Bernardo P. Quinzio. — Jorge A. Agúndez.
— Augusto Alasino. — Ernesto R. Oudin.
— Cristina E. Fernández de Kirchner. —
Angel F. Pardo. — Raúl A. Galván. —
José Genoud.*

En disidencia:

Pedro G. Villarreal.

**Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación**

(23 de octubre de 1996)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º—Incorpórase al título II del libro III del Código Procesal Penal el siguiente capítulo.

Artículo 431 bis:

1. Si el ministerio fiscal, en la oportunidad prevista en el artículo 346, estimare suficiente la imposición de una pena privativa de libertad inferior a seis (6) años o de una no privativa de libertad aún procedente en forma conjunta con aquella podrá solicitar, al formular el requerimiento de elevación a juicio, que se proceda según este capítulo. En tal caso, deberá concretar expreso pedido de pena.

En las causas de competencia criminal (artículo 32), el acuerdo a que se refieren los incisos 1 y 2 del artículo 431 bis, podrá también celebrarse durante los actos preliminares del juicio, hasta el dictado del decreto de designación de audiencia para el debate (artículo 359).

2. Para que la solicitud sea admisible deberá estar acompañada de la conformidad del imputado, asistido por su defensor, sobre la existencia del hecho y la participación de aquél, descritas en el requerimiento de elevación a juicio, y la calificación legal recaída.

A los fines de este artículo y en cualquier etapa del proceso, pero desde la aceptación del cargo del defensor designado, el fiscal podrá recibir en audiencia al imputado y a su defensor, de lo que se dará simple constancia.

3. El juez elevará la solicitud y la conformidad prestada, sin otra diligencia, al tribunal de juicio el que, tomará conocimiento de vista del imputado, y lo escuchará si éste quiere hacer alguna manifestación. Si el tribunal no rechaza la solicitud argumentando la necesidad de un mejor conocimiento de los hechos o su discrepancia fundada con la calificación legal admitida, llamará a autos para sentencia, que deberá dictarse en un plazo máximo de 10 días. Si hubiera querellante, previo a la adopción de cualquiera de estas decisiones, le recabará su opinión, la que no será vinculante.
4. Si el tribunal de juicio rechaza el acuerdo de juicio abreviado, se procederá según las reglas del procedimiento común con arreglo a los artículos 354 o 405, según corresponda, remitiéndose la causa al que le siga en turno.

En tal caso, la conformidad prestada por el imputado y su defensor no será tomada como un indicio en su contra, ni el pedido de pena formulado vincula al fiscal que actúe en el debate.

5. La sentencia deberá fundarse en las pruebas recibidas durante la instrucción, y en su caso en la admisión a que se refiere el punto 2º, y no podrá imponer una pena su-

perior o más grave que la pedida por el ministerio fiscal. Regirá el artículo 399.

6. Contra la sentencia será admisible el recurso de casación según las disposiciones comunes.
7. La acción civil no será resuelta en este procedimiento por juicio abreviado, salvo que exista un acuerdo entre las partes en tal sentido, aunque se podrá delear en sede civil. Sin embargo, quienes fueron admitidos como partes civiles podrán interponer el recurso de casación en la medida que la sentencia pueda influir sobre el resultado de una reclamación civil posterior.
8. No regirá lo dispuesto en este artículo en los supuestos de conexión de causas, si el imputado no admitiere el requerimiento fiscal respecto de todos los delitos allí atribuidos, salvo que se haya dispuesto la separación de oficio (artículo 43).

Cuando hubiera varios imputados en la causa, el juicio abreviado sólo podrá aplicarse si todos ellos prestan su conformidad.

Art. 2º — Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a todas las causas en trámite.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIERRE.
Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.

ACLARACION

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por el señor diputado Cafferata Norez.

DISIDENCIA TOTAL
DEL SENADOR PEDRO GUILLERMO VILLARROEL

Señor presidente:

Sin perjuicio de reconocer la necesidad de buscar alternativas procesales que simplifiquen y modernicen la persecución penal, la modificación que propone el presente proyecto de ley resulta poco conveniente y abre serias dudas sobre las ventajas de su aplicación.

Constituye casi un lugar común señalar que en el modelo inquisitivo reformado que inspira el procedimiento establecido por el Código Procesal Penal de la Nación, la etapa de instrucción o investigación adquiere una importancia determinante del resultado del juicio, hecho por el que se habla del "corrimiento del peso del procedimiento hacia la instrucción". En este contexto, el juicio aparece como garantía última de control del desequilibrio de poder de la instrucción, debido a los rasgos inquisitivos que conserva dicha etapa. El carácter preponderantemente acusatorio del juicio ofrece una instancia —no exenta de dificultades— de moderación del posible desbalance de poderes que surja de la etapa investigativa. Vistas así las cosas, resulta inconveniente la simplificación del juicio, cuando en rigor

los requerimientos de simplificación y de actuación por consenso de las partes deberían apuntar en nuestro sistema a los rasgos inquisitivos de la instrucción (cfr.: Binder, A., "Límites y posibilidades de la simplificación del proceso", en *Justicia penal y estado de derecho*, Buenos Aires (1993); Bovino, A., "Procedimiento abreviado", en *Temas de derecho procesal penal guatemalteco*, Guatemala (1996). El traslado de criterios inspirados en el procedimiento procesal penal estadounidense —donde no existe nada comparable con nuestra etapa formalizada de instrucción, y donde sí son comprensibles, aunque no siempre justificables en sus efectos, las exigencias de simplificación del juicio, dada la inmensa carga que requiere la realización de un debate oral, continuo y decidido por jurados— corre el grave riesgo de perder de vista la diferencia fundamental del contexto al que se quieren aplicar aquellas soluciones. En el modelo que rige nuestro procedimiento, la persistencia de rasgos inquisitivos de la instrucción sumada a la simplificación del juicio supone el peligro de trasladar a la instrucción el peso de la decisión sobre el hecho punible, la responsabilidad del imputado y la pena aplicable, debilitando a su vez los rasgos que constituyen la garantía más importante de control de los actos de la instrucción durante el juicio, es decir, el carácter contradictorio, oral y público del debate, el principio de inmediación, la necesidad de producción íntegra de la prueba en esa etapa, etcétera.

La modificación propuesta importa además otro grave, señalado reiteradamente por autores críticos del *plea bargaining* estadounidense: la posibilidad de que la no aceptación de la propuesta del fiscal por parte del imputado y su defensor vaya acompañada de la amenaza de un pedido de condena más grave (cfr.: Langbein, J., *Torture and Plea Bargaining*, University of Chicago Law Review, v. 46 (1978). De este modo, se pone en cuestión la supuesta "aceptación voluntaria" del imputado. Resulta aún más grave el hecho de que la efectiva realización del juicio común modifique sustancialmente su significado: el rechazo de la aplicación de un juicio abreviado y el reclamo de la realización de un juicio común corren el riesgo de ser "penalizados", en lugar de constituir una garantía de los derechos del acusado. El rechazo del acuerdo por parte del imputado lo coloca en situación especialmente desventajosa, ya que "impone" al ministerio público y al tribunal la carga de realización de un juicio pleno, mucho más trabajoso y exigente que las simples formalidades del juicio abreviado. No es ocioso señalar los peligros que acarrea una situación en la que el reclamo del ejercicio del derecho de ser juzgado con las debidas garantías supone una posición de partida desventajosa para el imputado.

Por estas razones, señor presidente, es que propongo el rechazo del proyecto de ley examinado.

Pedro G. Villarroel